

LA CAMPANA DE CRISTAL TURCA

El verano de 2004 ha contemplado un nuevo sentimiento de optimismo en Turquía. Un gobierno estable ha cosechado diversos éxitos tanto en la legislación de reformas democráticas como en diplomacia internacional. Se han instaurado los derechos y salvaguardas prometidos desde hace tanto tiempo, reduciendo significativamente el legado autoritario del Estado republicano. La UE anunció que el país había cumplido sus requisitos de reforma política y ya no precisaba un control de seguimiento. Se espera en general que las negociaciones para entrar a formar parte de la UE reciban el visto bueno a finales de este año, y que el capital exterior pueda empezar a entrar en el país. La inflación se ha reducido y la economía está actualmente en una fase alcista, registrando una tasa de crecimiento superior al 10 por 100 en el último trimestre. Pero hace apenas tres años, la inestabilidad política de Turquía –que estalló en una disputa pública entre el presidente y el primer ministro– catalizó una crisis financiera, con una devaluación monetaria del 50 por 100, una grave recesión y un aumento vertiginoso del desempleo. Un año después, en el verano de 2002, el gobierno de coalición (el séptimo que Turquía tuvo en una década) se hundió en el caos. Los resultados políticos y económicos de estos descalabros se desplegaron en el contexto de la guerra y la ocupación de Iraq dirigidas por Estados Unidos, las presiones de la UE para que se reformara el sistema estatal fuertemente autoritario, la victoria electoral del partido populista islámico AKP y la intensificación de la reestructuración dirigida por el FMI.

La crisis de 2001 representó el fracaso de la elite tradicional turca, que durante veinte años intentó apuntalar su vacilante control ideológico recurriendo a la coerción estatal. El Estado es un concepto con un referente inequívoco en el contexto turco. A ojos del Estado, la nación es una totalidad orgánica cuyos verdaderos intereses sólo pueden conocidos e impulsados por la elite kemalista gobernante. Exige una vigilancia constante contra las fuerzas que podrían dismantelar el país y amenazar la unidad nacional turca. La hegemonía de la elite se estableció mediante la construcción del Estado-nación a partir de las cenizas de la derrota otomana y se sostuvo mediante los aparatos ordinarios de colegios y cuarteles. Se perpetuó mediante el control del cambio monetario y el crédito durante las tres décadas de des-

arrollismo que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. El arsenal de políticas y recursos del Estado dominó a una burguesía débil y llevó a los grandes empresarios a aliarse en torno a una estrategia de desarrollo nacional centralmente coordinado, basado en el modelo de sustitución de importaciones.

Como en Iberoamérica, el desarrollo llegó a su fin debido a la incapacidad de perpetuar una economía en buena medida cerrada. La crisis fue ocasionada por los problemas para conseguir moneda extranjera. La urbanización y la industrialización habían garantizado que la mayoría de los artículos de consumo básico, bienes duraderos incluidos, fueran de fabricación interna. La economía turca producía una cantidad suficiente de productos básicos, como acero y sustancias petroquímicas. Pero ninguno de estos sectores podía esperar competir en el mercado mundial. Las empresas estatales estaban cargadas con un exceso de trabajadores, mientras que en el sector privado las posiciones monopolísticas se traducían en elevados beneficios y salarios. A pesar de mantener una respetable evolución del crecimiento, la economía no conseguía generar las divisas necesarias para importaciones esenciales como petróleo y nueva tecnología.

La respuesta de los dirigentes políticos turcos en la década de los setenta fue la de perpetuar la retórica desarrollista nacional, pedir prestados dólares en el extranjero y seguir protegiendo a la industria, apoyando a la agricultura y subvencionando a los consumidores. Intentaron controlar el mercado mediante decreto, manteniendo los tipos de cambio y los precios en niveles artificiales, y vieron impotentes cómo aumentaban las escaseces y florecía el mercado negro. La crisis económica y la dislocación social que ésta instigó atizaron la ya enfurecida lucha política entre la extrema derecha y la izquierda revolucionaria. El golpe militar de 1980 fue, en consecuencia, respuesta tanto al punto muerto económico como a la crisis política. Marcó el comienzo de un régimen de excepción bajo el cual la alianza de los intereses estatistas y autoritarios consiguió paralizar todos los intentos de atravesar su propia niebla de ideología nacionalista.

El principal legado institucional de los tres años de tutelaje militar manifiesto (1980-1983) fue la Constitución de 1982. Bajo esta ley básica, los poderes del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) aumentaron hasta establecer algo equivalente a un gobierno paralelo, mientras que los Tribunales de Seguridad del Estado se convirtieron en un sistema judicial paralelo con jurisdicción sobre los «delitos contra el Estado». En el CNS, los jefes del estado mayor militar se reunían con los miembros del gobierno y dictaban las políticas que debían seguirse. Fue dotado de una plana mayor y una secretaría permanentes, pensadas para reunir toda la información de inteligencia y establecer la política que debía ser aplicada por la burocracia pertinente, a veces dejando de lado a los ministros políticamente designados¹. Gradualmente amplió sus competencias para

¹ La verdadera condición del CNS emergió durante el transcurso de la guerra contra la población kurda del sureste: la administración de la zona en guerra y todos los asuntos de liber-

cubrir cualquier asunto que pudiera considerarse importante en la guerra total contra el separatismo y el movimiento islámico. Se estableció un Consejo Superior de Educación para vigilar las universidades, a su personal y sus programas educativos, y un organismo similar para regular el contenido de todos los medios de radiodifusión. Prácticamente todo, desde la política exterior y militar hasta la estructura de los derechos civiles y políticos, desde los programas de educación secundaria hasta la política energética, se decidía en último término en las reuniones mensuales del CNS, invariablemente siguiendo las líneas formuladas por su secretaría. Los gobiernos civiles que ocuparon el cargo a partir de la victoria de Turgut Özal en las elecciones de 1983 se ocupaban esencialmente de la política económica y de gestionar la deuda. Mientras tanto, los Tribunales de Seguridad del Estado servían de órganos impertérritos del «Estado profundo»: su jurisdicción se extendía a todo lo que se considera genéricamente político, desde los derechos humanos a cualquier cosa que el Estado considerase propaganda separatista, una categoría en la que podía entrar el mero hecho de cantar una canción en kurdo².

Reestructuración económica

Bajo el régimen militar y del CNS, podía llevarse a cabo una remodelación radical de la economía con una resistencia mínima. El gradual desmantelamiento del sector industrial que sustituía a las importaciones se llevó a cabo en un momento en el que empeoraba la distribución de las rentas. La proporción de salarios y sueldos en la renta nacional cayó desde aproximadamente el 30 por 100 en la década de los setenta a aproximadamente el 20 por 100 en la de los ochenta. Los salarios en las fábricas habían aumentado, más o menos en línea con la productividad, en las tres décadas posteriores a 1950; por el contrario, en 2000, el nivel de los salarios reales era igual al que presentaban en 1980, habiendo caído por debajo de este nivel durante largos periodos intermedios. El número de trabajadores industriales en el sector público cayó de 250.000 a 100.000 entre 1980 y 2000, debido a la reducción de personal y a la privatización. Los trabajadores de las industrias estatales habían constituido el núcleo del movimiento sindical en las décadas de los sesenta y los setenta: sindicalistas organizados que recibían salarios relativamente elevados y buenas prestaciones. Con la privatización, la liberalización y el empleo flexible, las ventajas de las que habían disfrutado en un sector industrial protegido disminuyeron rápidamente. La subcontratación, la expansión de empresas de menos tamaño y el trabajo a destajo se convirtieron en prácticas comunes; especialmente a medida que el sector ser-

tad de expresión y el ejercicio de los derechos relacionados con el problema kurdo y asuntos étnicos pasaron a la autoridad de facto del CNS.

² Ömer LAÇINER, Ahmet İNSEL, Tania BORA y Gülay GÜNLÜK-ŞENESEN, «Bir Zümre, Bir Parti, Türkiye'de Ordu», *Birikim*, número especial (agosto-septiembre de 2002).

vicios ganaba terreno, las condiciones de trabajo informales y diversificadas aumentaban³.

Al mismo tiempo, la liberalización del mercado desataba energías empresariales en todos los niveles; de repente se permitió a comerciantes mayoristas y minoristas que hicieran cosas por las que unos años antes habrían ido a la cárcel. Las estructuras industriales de la era desarrollista se habían caracterizado por el oligopolio de unas cuantas sociedades instrumentales con múltiples tentáculos, mediante las cuales la burguesía sustitutiva de la importación de Estambul, con su acceso privilegiado a los políticos de Ankara, había conseguido mantener un férreo control de la economía. Con la liberalización surgió una nueva hornada de empresarios que debía competir en los mercados globalizados y adaptar su comportamiento a las señales comerciales y de consumo y no a las decisiones burocráticas; de ahí que su dependencia de la política fuera menos directa. Como las exportaciones turcas gravitaban hacia las manufacturas que precisan un uso intensivo de mano de obra, varias ciudades anatólicas de menos tamaño, con tradiciones artesanas y fuerzas de trabajo no sindicadas, donde los hogares podían incorporarse a acuerdos de subcontrata, comenzaron a emerger como centros industriales regionales⁴. La mayor parte de la producción de estas ciudades, los denominados tigres anatolios, se basó en redes establecidas por los compradores: empresarios contratados directamente por cadenas de venta al por menor y compradores de volumen europeos. Los acuerdos con la burocracia económica del Estado se consideraban más una carga que una ventaja.

De esa forma, la década de los ochenta contempló la aparición de nuevos sectores, nuevos mercados, nuevas formas de organización del trabajo y nuevas geografías. Las exportaciones aumentaron desde los 3.000 millones de dólares en 1980 hasta los 13.000 en 1990, y a 50.000 millones de dólares en 2003, una expansión debida completamente a las manufacturas, especialmente textiles. Desde el punto de vista de Ankara, los nuevos empresarios funcionaban fuera de las redes usuales de influencia y privilegio, y no compartían el estilo occidentalizado y el laicismo militante de sus homólogos más establecidos de Estambul; era más probable que apoyaran a un partido islamista, y que se asociaran a la MÜSIAD, una asociación de empresarios islámicos, que se convirtió en un contrapeso social y político importante a la TÜSIAD, la asociación de empresarios de Estambul⁵.

³ Hoy, sólo el 5 por 100 de los trabajadores está sindicado –apenas un millón entre los más de veinte millones de trabajadores– dentro de un estructura institucional fuertemente fragmentada.

⁴ Véase, por ejemplo, Asuman TÜRKÜN-ERENDİL, «Mit ve Gerçeklik Olarak Denizli–Üretim ve İlgücünün Değişen Yapısı», *Toplum ve Bilis* 86 (2000). Este patrón se adapta bien a las expectativas de la teoría posfordista: véase Charles SABEL, «Flexible Specialization and the Re-emergence of Regional Economies», en Ash AMIN (ed.), *Post-Fordism*, Oxford, 1994.

⁵ Ayşe BUĞRA, «Class, Cultur, and State», *International Journal of Middle East Studies*, vol. 30, núm. 4 (1998).

Movimiento islamista

La apertura al mercado mundial y la reestructuración de la economía vaciaron los recursos que habían servido para comprar la aquiescencia popular. Las dos últimas décadas de la historia turca han estado teñidas por el intento por parte de las fuerzas estatales de encontrar nuevas formas de garantizar la dominación sobre una sociedad transformada que cada vez se hace oír más. Habiendo perdido la legitimidad que se les había concedido durante el periodo desarrollista, desde 1980 han confiado fuertemente en diversas formas de coerción para mantener la ecuación estatista ante las fuerzas emergentes que han procurado establecer su propia autonomía económica, cultural y política. El ascenso de los partidos islamistas ha supuesto un dilema particular para la clase gobernante tradicional. El laicismo, definido como un estricto control estatal de la religión, ha sido una de las principales preocupaciones de la elite turca desde la creación de la república. De acuerdo con su concepto de modernización, debían adoptarse modos de conducta occidentales que sustituyeran a los particularismos locales; el islam, por supuesto, era la expresión más evidente de lo local. Además, una interpretación fundamentalista de la ley islámica entraba en conflicto tanto con la lealtad exigida por el Estado a sus ciudadanos como con el sistema jurídico único que el kemalismo deseaba imponer. Sin embargo, contradiciendo su retórica vigilante, los republicanos han sido de hecho pragmáticos hasta con las versiones más extremas de confesión religiosa; su laicismo oculta una hipocresía subyacente hacia el islam y los islamistas. Desde la década de los cuarenta, los partidos políticos han negociado con los líderes de sectas, ofreciendo concesiones a los colegios religiosos a cambio del voto de sus seguidores. Tras el golpe de 1980, la junta militar adoptó ciegamente la política estadounidense de fomentar el islamismo como barrera contra el movimiento socialista⁶. Con un sistema educativo perjudicado por las medidas de austeridad presupuestaria impuestas por el FMI, durante la década de los ochenta la matriculación en los *lycées* religiosos apoyados por la Administración pública aumentó más rápidamente que la de las escuelas secundarias generales y la religión se convirtió en elemento obligatorio del programa de enseñanza. Durante estos años, los dirigentes de los partidos competían por mantener buenas relaciones con las diversas facciones islámicas moderadas y modernizadoras, y fue Özal quien consiguió su respaldo en 1983.

Desde mediados de la década de los ochenta, los islamistas han ido aumentando constantemente su porcentaje de votos. Bajo el liderazgo de Nec-

⁶ Durante la guerra contra los kurdos, el «Estado profundo» contrató a una brutal facción extremista de islamistas, Hezbolá, para eliminar a los empresarios que simpatizaban con el bando kurdo. Compuesta en su mayoría por kurdos, Hezbolá era una facción fundamentalista suní, sin relación con el partido chiíta del mismo nombre. Ahora se sabe que este mecenazgo continuó cuando cesaron las hostilidades en el sureste, facilitando la movilidad internacional de Hezbolá y su supuesta participación en los atentados suicidas perpetrados en Estambul en noviembre de 2003. La pretensión de las fuerzas de seguridad de conseguir controlar a los fundamentalistas para sus propios fines se había vuelto contra ellos.

mettin Erbakan, el islamista Partido Refah (del Bienestar) obtuvo el 8 por 100 de los votos en 1987, el 16 por 100 en 1991 y el 21 por 100 en 1995. Los observadores del islam político han sostenido que la plataforma fundamentalista, definida como un proyecto para sustituir el Estado moderno y las leyes occidentales por sus homólogos islámicos, ya no atrae más que al 6 ó 7 por 100 de la población. Los votantes de partidos islámicos no han aumentado supuestamente porque quieran un cambio antilaico del sistema, sino porque son partidarios de la apertura, de una ampliación de la base que el sistema reconoce. El islam ha servido de toque de rebato para aquellos que se veían obligados a permanecer fuera de los muros imaginarios de las ciudades cuando comenzó la urbanización a gran escala, para los pequeños empresarios contra la burguesía de Estambul apoyada por el Estado, para los políticos a los que no les gustaba el sello de aprobación de los militares⁷.

Los anteriores partidos islámicos –Refah, disuelto bajo presión del CNS en 1998, seguido de su poco duradero gobierno de coalición con la Senda Verdadera (DYP) de Tansu Çiller, de centro derecha, fue sustituido por Fazilet (Virtud), a su vez disuelto en 2001– oscilaron entre desafiar al sistema y adaptarse a él, y no consiguieron unir este impulso populista con un programa políticamente aceptable para la elite turca. La división que en 2001 se produjo entre las filas islamistas después de la prohibición del Partido Fazilet contempló la creación del Partido Adalet ve Kalkinma (Partido de la Justicia y el Desarrollo –AKP–) dirigido por Abdulá Gül y Tayyip Erdoğan, mientras que la vieja guardia reunida en torno a Erbakan creaba el Partido Saadet (Partido de la Felicidad). El AKP consiguió combinar la retórica electoral dirigida a los excluidos con un mensaje a la elite de que su programa no incluía el cambio de régimen. En las elecciones celebradas en noviembre de 2002, los dos partidos islámicos obtuvieron el 37 por 100 de los votos, y el AKP obtuvo por sí solo el 34 por 100. El umbral del 10 por 100 impuesto por la constitución del CNS descalificaba debidamente a todos los demás partidos excepto uno, dejando al AKP con el 60 por 100 de los escaños⁸.

El atractivo popular del AKP se basa en que proporciona una voz a los antes excluidos, mientras que la validez de sus promesas materiales deriva en gran parte del historial de gobierno local de sus formaciones políticas precedentes, que consiguieron labrarse una reputación de relativa honradez en administraciones habitualmente plagadas de corrupción. Estas mu-

⁷ Se ha escrito mucho sobre el movimiento islámico en Turquía: Binnaz TOPRAK, *Islam and Political Development in Turkey*, Leiden, 1981; Nilüfer GÖLE, *The Forbidden Modern: Civilization and Veiling*, Ann Arbor (Michigan), 1996; Jenny WHITE, *Islamist Mobilization in Turkey*, Seattle (Washington), 2002, son representativos. Véase también Haldun GÜLALP, «Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey's Welfare Party», *International Journal of Middle East Studies*, vol. 33, núm. 3 (2001).

⁸ Los votos populares fueron el 9,6 por 100 para la Senda Verdadera de Çiller, el 8,3 por 100 para los Nacionalistas, el 5,1 por 100 para Madre Patria y el 1,2 por 100 para Ecevit.

nicipalidades iniciaron políticas de asistencia social en un entorno en el que prácticamente no existía una política de seguridad social estatal destinada a los pobres, y donde la filantropía organizada era escasa. Organizaban cocinas económicas y centros de salud, ofrecían ayuda en especie a los pobres, e invariablemente establecieron sistemas de asistencia social durante el Ramadán, presionando a los empresarios locales para que donaran mercancías, edificios y dinero. Tal compromiso involucró a gran cantidad de activistas de partido (especialmente mujeres jóvenes) que construyeron redes y vínculos con la población. El propio Tayyip Erdoğan fue el popular alcalde de Estambul desde 1994 hasta su breve encarcelamiento en 1998. De esa forma, los partidos islamistas han sido el conducto principal para la expresión del resentimiento económico. A pesar de la verdadera aceptación de la ortodoxia neoliberal por parte de los líderes del AKP y aunque también articulan las aspiraciones y el descontento de una burguesía anatolia ascendente contra la oligarquía empresarial establecida, reciben el grueso de sus votos de los pobres. Este respaldo de los excluidos se debe más a la crítica contra el sistema político y su corrupción que al hecho de que hagan promesas explícitas de reestructurar la economía o de establecer una política social basada en los derechos.

Las cuestiones kurdas

Además del movimiento islámico, la cuestión que ha ocupado la agenda turca más constantemente desde 1980 ha sido el problema kurdo. Cualquier tipo de acercamiento al separatismo kurdo o de cualquier otro tipo fue, por supuesto, estrictamente prohibido en la fundación de la República, y el uso del idioma kurdo en los discursos públicos o en la educación ha sido rígidamente ilegal desde entonces. La brutal supresión cultural unida al subdesarrollo económico alimentó inevitablemente la resistencia. La ley marcial fue continua en las provincias kurdas después de 1983, y estuvo acompañada de detenciones masivas, tortura y traslado forzoso de los habitantes de las aldeas. En 1984, Abdullá Öcalan volvió del exilio sirio para liderar el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en los ataques guerrilleros contra las fuerzas de seguridad. En consecuencia, la represión estatal se intensificó: la guerra se cobró 30.000 vidas antes de terminar por fin en 1999.

Durante la década de 1990, la guerra contra las fuerzas kurdas se utilizó para justificar la transición gradual a un Estado de seguridad nacional, mientras el método elegido por el ejército para responder a la insurgencia —primero la victoria militar y después las libertades culturales— se imponía. La guerra permitió la vuelta del *Rechtsstaat* [«Estado de derecho»] como capa protectora bajo la que podía florecer una nueva era de represión y gobierno arbitrario. Las aperturas tentativas creadas por el gobierno de Özal después de 1983 —ampliaciones de la esfera social para reconocer los estilos de vida hasta entonces tabú fomentados por la liberalización del mercado— retrocedieron. La década se caracterizó por un autoritarismo dominado

por los militares, unido a una falta de responsabilidad. Todos los intentos de introducir la democracia y el imperio de la ley fueron brutalmente invadidos en nombre de la seguridad nacional.

El ejército justificó su regencia por la guerra; pero ésta también puso en entredicho su posición. Las «fuerzas especiales» habían conseguido una particular fama de brutalidad por el trato que daban a los civiles. Buena parte de la población abandonó la zona de guerra. A mediados de la década de los noventa, más de 1.500 asentamientos rurales fueron evacuados como parte de la campaña militar contra la guerrilla, lo cual condujo a un desplazamiento masivo de campesinos kurdos. El área se había convertido en una jurisdicción separada, gobernada por un estado de excepción. Los soldados de reemplazo cuentan su experiencia deshumanizadora durante el servicio militar⁹. Hubo casos de tortura bien documentados en las cárceles, y otros en los que el ejército y los servicios de inteligencia utilizaron a civiles para eliminar a los supuestos partidarios del PKK. Como en casos similares en otras partes, en ocasiones los fondos para dichas actividades clandestinas se obtenían por medios delictivos.

La estrategia militar de derrotar a las guerrillas antes de que se pudieran establecer negociaciones sobre los derechos culturales y políticos no habría alcanzado su caro éxito si hubiera habido una plataforma separatista que gozara de mayor apoyo. El fracaso del PKK se ha debido a razones históricas y políticas. Durante el imperio otomano, la etnia –al contrario que la religión o la secta– nunca había constituido una barrera para la asimilación o el matrimonio mixto. Este legado de neutralidad étnica se ha mantenido en el plano social en la Turquía moderna, donde la burguesía y la elite política y cultural proceden de diversos orígenes y los matrimonios reúnen a correligionarios de todas las etnias, incluidos kurdos, circasianos, albaneses, bosnios y conversos recientes al islam. La asimilación ha sido la norma en el caso de los kurdos que se han trasladado desde el sureste y el este al oeste de Turquía. Desde hace tiempo los kurdos han destacado en política y han estado sobrerrepresentados en el Parlamento. Sin embargo, el precio de la asimilación fue la supresión de la identidad étnica. Mientras que en el Imperio cualquiera podía seguir siendo kurdo y, aun así, entrar a formar parte de la elite otomana, en el Estado nación turco la kurdidad, como cualquier otra filiación étnica, debía constituir un asunto privado; en público, eran todos turcos. Así, mientras que la política de identidad y reconocimiento cultural tendría un atractivo mucho más amplio entre los kurdos residentes fuera de la región, el separatismo no.

⁹ El libro de Nadire MATER, *Mehmedin Kitabı: Güneuydoğu'da Savaşmış Askerler Anlatıyor*, Estambul, 1999, fue un hito. Véase el artículo de reseña escrito por Ayşe Gül ALTINAY, «*Mehmedin Kitabı. Challenging Narratives of War and Nationalism*», *New Perspectives on Turkey*, núm. 21, 1999. Se puede encontrar un relato reciente en Hasan CEMAL, *Kürtler*, Estambul, 2003; y una perspectiva más amplia en Kemal KIRIŞCI y Gareth WINROW, *The Kurdish Question and Turkey, an Example of a Trans-state Ethnic Conflict*, Londres, 1997.

No hay cifras fiables sobre la composición étnica de la población en Turquía, dado que los censos evitan asiduamente las cuestiones de etnia o lengua materna. Los mejores cálculos sugieren que la población kurda (definida de diferentes maneras) asciende a entre el 10 y el 20 por 100 del total, pero los matrimonios mixtos hacen que el cómputo sea imposible. En 1990, quizá la tercera parte de los kurdos vivían en las provincias occidentales del país; en 2000, tras diez años de guerra, la proporción había aumentado al 50 por 100. Estambul es con mucho la mayor ciudad kurda, con más de un millón de habitantes de dicha etnia. Entre los que habitan en Turquía, sería difícil encontrar muchos partidarios de un movimiento separatista que suscribiera el objetivo de establecer un Kurdistan sin acceso al mar. Los que han emigrado recientemente a Estambul y a las grandes ciudades de la Anatolia occidental han sido campesinos pobres, expulsados de sus aldeas, pero con pocos deseos de volver. En otras palabras, a la mayoría de la elite de etnia kurda no le interesa la solución separatista, y es improbable que la población kurda subalterna, que ahora supone una proporción elevada de los pobres urbanos en las grandes ciudades, se adscriba a un movimiento de este tipo.

Había una dimensión adicional que dificultaba que la elite kurda, rural o urbana, se alineara con el movimiento nacionalista. Mientras que insurrecciones kurdas anteriores, en las décadas de los veinte y los treinta, se habían originado en la clase terrateniente y en los dirigentes religiosos, el movimiento actual está arraigado en el campesinado pobre. El PKK comenzó como un movimiento antifeudal contra los terratenientes kurdos del sureste de Turquía, que habían sido aliados voluntarios del Estado republicano en el mantenimiento del control social. En otras partes, los creadores del Estado turco se habían aliado con el campesinado independiente e incluso habían apoyado la ocupación de tierras por parte de los agricultores pobres, pero en el sureste habían evitado cambiar el equilibrio social. Cuando, en la década de los setenta, comenzó el movimiento campesino, Ankara envió gendarmes a proteger a los terratenientes de las insurgencias. Esto explica el «socialismo» del PKK, su afinidad declarada con movimientos como Sendero Luminoso, pero también la falta de respaldo entre la elite kurda a la ideología y a la táctica de guerrillas adoptadas por el PKK y a su comandante Öcalan. Algunos jefes de clan siguieron respaldando a Ankara contra los insurgentes mientras el Estado reclutaba y armaba una tropa de unos 60.000 «guardias de aldea», también de etnia kurda, que supuestamente debían proteger a las poblaciones locales contra las guerrillas. Fueron frecuentes los choques entre ambas formaciones, y la campaña lanzada por el PKK para atraer a los campesinos degeneró a veces en intimidación y masacres que casi llegaron a tomar la apariencia de una guerra civil kurda.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó su primera resolución sobre la cuestión kurda después de la guerra del Golfo, con la creación de una zona de exclusión aérea en el norte de Irak, vigilada por Estados Unidos, lo cual puso así oficialmente en la agenda internacional la

cuestión de los derechos humanos de los kurdos. El mismo año, Özal propuso modificar la prohibición de usar el idioma kurdo, para permitir su uso en conversaciones no oficiales. Su muerte repentina impidió que prosiguieran las negociaciones, y sus sucesores pasaron rápidamente a fortalecer la presencia del ejército en el sureste. Finalmente la guerra terminó en 1999. En febrero de ese año, Öcalan fue capturado en Kenia, con ayuda israelí y estadounidense, devuelto a Turquía para que lo juzgara el Tribunal de Seguridad Estatal y condenado a muerte. En agosto, pidió al PKK que depusiera las armas.

Desde la muerte de Özal, ningún político civil había sugerido que pudiera haber una solución no militar. El CNS vetó todos los intentos de sacar a colación el asunto de los derechos culturales, aunque gradualmente empezó a ser aceptable hablar sobre lo que eufemísticamente se denominaba «la realidad kurda». Pero incluso tales avances simbólicos se debían a los grupos defensores de los derechos humanos y a los periodistas, no a los políticos. Sobre el trasfondo de la guerra, los partidos políticos permanecieron en su mayoría silenciosos, aceptando tácitamente la estrategia militar, sin poner en duda los efectos de la imposición rígida de la identidad nacional a la población. Los regímenes internos fuertemente centralizados de los partidos, en los que las listas de candidatos son elaboradas por los dirigentes, aseguraban un voto de bloqueo en el Parlamento. El Partido de la Izquierda Democrática (DSP) de Ecevit, denominado «alianza familiar» en la prensa, era el más avanzado en servilismo. Los nacionalistas de extrema derecha (dirigidos por los veteranos turcos) eran la facción más sincera del campo militarista, pero Ecevit, con una insistencia similar en la santidad y la soberanía de la nación, era al menos igual de inflexible en la defensa de las restricciones impuestas por la Constitución de 1982. El Partido de la Madre Patria (ANAP), dirigido por Mesut Yilmaz, y el DYP eran más bien asociaciones de interés poco precisas, sin una línea política estable. Todos ellos participaron en uno u otro de los gobiernos de coalición poco duraderos que caracterizaron la década de 1990, manteniendo debidamente la línea dictada por el CNS; todos ellos cayeron por debajo de la línea del 10 por 100 en las elecciones celebradas en noviembre de 2002. Sólo las condiciones extraordinarias de la guerra civil y el confinamiento ideológico, impuesto por los militares, pudieron permitir que su corrupción e ineptitud se mantuvieran incólumes.

Una función del umbral del 10 por 100 era la de garantizar que el movimiento kurdo no estuviera representado en el Parlamento. Cuando en 1994 los partidos kurdos establecieron un alianza electoral con el centro izquierda y superaron el porcentaje, seis diputados fueron detenidos acusados de ayudar al PKK; permanecieron en prisión hasta junio de 2004. Dado que el Parlamento se había convertido en una atracción secundaria, el verdadero debate político sobre cuestiones de democracia, representación étnica y los efectos de la liberalización económica se trasladó a diversos foros extraparlamentarios: defensores de los derechos humanos, el movimiento feminista, plataformas pacifistas, ONG.

La crisis de la deuda

También desde el punto de vista económico la de 1990 fue para Turquía una década perdida. Mientras que el crecimiento había alcanzado una media del 5,3 por 100 en la década de los ochenta, la economía disminuyó un 6 por 100 en los años de crisis de 1994 y 1999 y un 9 por 100 en 2001. La inversión cayó, mientras que las quiebras y el desempleo explotaron. La tasa de inflación media rondó el 80 por 100. A partir de los niveles manejables de comienzos de la década de los noventa, el endeudamiento estatal alcanzó el alarmante nivel del 150 por 100 del PIB en 2001. Dado que la acumulación aumentaba año tras año, hacían falta todos los ingresos fiscales del país para pagar la deuda; para funcionar más allá de la gestión de la deuda, la Administración pública tuvo que recurrir a nuevos préstamos. El nivel de acumulación de deuda se ha debido en gran parte a las tasas de interés excesivamente altas pagadas a los prestamistas internos, que durante buena parte de la década de los noventa alcanzó una media del 20 por 100 en términos reales. Como el préstamo al gobierno proporcionaba tales beneficios, la inversión en el sector real se vio perjudicada. Los bancos compraban bonos emitidos por el Tesoro y ofrecían atractivos intereses a los depositarios. El grueso de la deuda era propiedad de un pequeño grupo que acaparaba la concentración de riqueza y poseía depósitos bancarios a un alto interés. En 2002, los pagos de intereses ascendieron aproximadamente al 20 por 100 del PIB, y nueve décimas partes de dicho porcentaje correspondieron a la deuda interna. Hace un siglo, Rosa Luxemburg describió cómo se empleaba el Estado otomano como conducto recaudador de impuestos para que los financieros internacionales se apropiaran del superávit; los beneficiarios de hoy en día son un pequeño grupo de rentistas locales.

La transferencia sistemática de ingresos fiscales por parte del Estado a una clase rentista acabaría creando resentimiento en los «elementos activos y trabajadores» de la economía real¹⁰. No sólo sufrieron un empeoramiento en la distribución de las rentas, sino que también se vieron privados de los gastos del sector público, debido al agotamiento presupuestario. La economía de la deuda introdujo otra distorsión en forma de inusual rentabilidad de la actividad financiera, que consistía principalmente en transacciones con bonos del Estado. Los bancos pedían prestado en los mercados extranjeros para comprar deuda pública, jugando con el diferencial entre el tipo de interés y la depreciación de la lira turca. Los ahorradores e inversores internos mantenían inversiones en moneda local y extranjera, comprando y vendiendo de acuerdo con sus expectativas. La consiguiente volatilidad fomentó aún más la especulación. En esta frenética lucha por el reparto del botín, el sector financiero recogió elevados beneficios gracias a la media-

¹⁰ Sentimientos expresados por Keynes, citados en Yılmaz AKYÜZ y Korkut BORATAV, «The Making of the Turkish Financial Crisis», *Discussion Paper* 158 (2002), UNCTAD. Véase también Erınç YELDAN, *Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi*, Estambul, 2001.

ción, y fomentó la corrupción, la intromisión política y el clientelismo. Se produjo también una alta incidencia de inversiones recíprocas entre el sector financiero y los medios de comunicación influyentes: las editoriales podían aprovechar su influencia para comprar bancos y los banqueros protegían su posición adquiriendo medios de comunicación. Los mayores incidentes de corrupción implicaron a políticos aliados con propietarios de bancos que se dedicaban a desvalijar la hacienda pública.

Mientras tanto, los sucesivos gobiernos se encontraron escasos de fondos. A medida que la globalización neoliberal penetraba más profundamente, la clase política era incapaz de proteger a la población contra los estragos provocados por las fuerzas del mercado. En lugar de establecer una reforma fiscal políticamente impopular, restringieron todos los gastos, de acuerdo con las recomendaciones hechas por el FMI. Así, se permitió que los servicios de educación pública y sanidad se deterioraran (en 2000, los gastos sociales en sanidad y educación habían descendido al 3,5 y al 2,2 por 100 del PIB, respectivamente). Se privatizaron las empresas de propiedad pública, se suspendieron las subvenciones al consumo y se redujo la ayuda agrícola. La inversión pública se agotó y no se establecieron nuevas medidas de asistencia social, a pesar de percibirse ampliamente los estragos causados por la nueva pobreza. El puesto ocupado por Turquía en los informes sobre el desarrollo humano es el 85, muy por debajo de su clasificación en cuanto a PIB per cápita.

¿Hacia Europa?

Quizá el principal determinante del escenario político turco en años recientes haya sido la candidatura de Turquía para ingresar en la Unión Europea, posiblemente el único proyecto nacional que disfruta de respaldo popular. Esto no siempre ha sido así. En 1987, cuando Özal solicitó por primera vez la admisión plena, tanto las fuerzas políticas islámicas como las nacionalistas se mostraron drásticamente contra una asociación más íntima con Europa, y lo que quedaba de la izquierda aún no había superado su fascinación por el tercermundismo. A pesar de que se relajara el control estatal de la economía, la mimada burguesía turca, temiendo perder los cómodos beneficios que le proporcionaban el mercado protegido y las subvenciones estatales, distaba mucho aún de trazarse un curso independiente. En la década de los noventa, esto empezó a cambiar. La boyante clase media urbana se estaba impacientando ante las interpretaciones oficiales de la identidad nacional, propagadas por los autores del proyecto de modernización. Algunos elementos de la intelectualidad empezaron a poner en duda las premisas básicas del desarrollismo estatal. Mientras el anterior debate político se había mantenido en un continuo derecha-izquierda, la plataforma de oposición se centró ahora cada vez más en los derechos civiles. La candidatura para ingresar en la Unión Europea se convirtió en una baza crucial en esta coyuntura. Consciente de que no tenían los recursos ni la capacidad de movilizar a las fuerzas

sociales para derrotar al Estado, los grupos opositores consideraron el proceso de candidatura como la única forma de conseguir el apoyo necesario para obtener mayor democracia, el imperio de la ley y un mayor pluralismo, tal y como se establece en los criterios de Copenhague. Al final de la década, las alas moderadas de los movimientos islámico y kurdo se habían unido a las filas de los activistas a favor de la sociedad civil y de los derechos humanos para pedir un rápido cumplimiento de las condiciones impuestas por Bruselas.

De hecho, la UE había adquirido una importante presencia en Turquía a finales de la década de los noventa. Los europarlamentarios visitaban regularmente las áreas en conflicto, inspeccionaban cárceles y respaldaban abiertamente a las organizaciones de derechos humanos. La oficina de la UE en Ankara financió proyectos con el objetivo de fortalecer la sociedad civil; a través de actividades de las ONG se establecieron contactos tan variados como el trabajo con los niños sin techo o la financiación a grupos ecologistas. Las visitas oficiales servían para recordar al público que esta relación especial seguía su curso. De manera casi imperceptible, la UE se había convertido en uno de los actores de la política y la opinión pública turcas. En la hasta entonces aislada escena política del país habían penetrado nuevas redes centradas en Europa, a las que se sentían atraídos ONG, partidos políticos y organismos estatales.

Adicionalmente, la gran burguesía de Estambul hizo valer todo su peso a favor del proyecto de la UE. Aunque la solicitud de entrada presentada por Özal en 1987 se había encontrado con el rechazo de la Comisión —la respuesta de ésta en 1989 había mostrado dudas sobre la ampliación así como sobre el proteccionismo y los desequilibrios de la economía turca—, había propuesto a cambio una unión aduanera de libre comercio, que debía entrar en vigor a partir de 1995. Inicialmente, el acuerdo de libre comercio fue recibido con suspicacia por algunos grandes industriales turcos de primera generación. Habiendo hecho su fortuna gracias al proteccionismo, recelaban de la competencia desenfrenada. Sin embargo, para muchos empresarios de menor tamaño orientados a la exportación, la Unión Aduanera no sólo prometía mercados, sino que también señalaba la esperanza de mantener fuera de sus asuntos a los caprichosos ministerios y a las autoridades responsables de planificación. La lucha por la firma del acuerdo fue un umbral importante, después del cual a la burguesía no le quedó más elección que competir en mercados más amplios. En consecuencia, sus objetivos pasaron a ser la racionalización del entorno económico y la represión de las prerrogativas estatales arbitrarias. A mediados de la década de los noventa, tanto la TÜSIAD como la nueva burguesía anatolia habían adoptado una plataforma de democratización y reforma, apoyando un programa relativamente congruente de liberalización económica y política¹¹.

¹¹ Ziya ÖNİŞ y Umut TÜREM, «Business, Globalization and Democracy: A Comparative Analysis of Turkish Business Associations», *Turkish Studies*, vol. 2, núm. 2, 2001. Respecto a la his-

Con este fin, la TÜSIAD invitó a destacados académicos a redactar propuestas de reforma de la Constitución, el poder judicial y el sistema electoral; publicó artículos de toma de postura sobre la situación kurda, la educación, los derechos humanos y la democratización. Aunque no se podían considerar heroicos en la defensa de sus posturas contra los representantes estatales que les desagradaban, sus tímidos intentos de establecer una tardía plataforma de libertades burguesas influyeron de manera importante en el inicio de un debate legitimador sobre estas cuestiones. Lo notable de estos hechos fue que los empresarios anatolios y de Estambul estaban de acuerdo en que era necesario frenar los excesivos poderes del Estado. La falta de voluntad política para introducir remedios radicales y el descarado entusiasmo por el soborno habían convertido a Ankara en una excrecencia que les resultaba difícil tolerar.

Lo que posibilitó la oposición de la «sociedad civil» a las continuadas prerrogativas estatales fue que la elite del Estado y los políticos poderosos nunca abandonaron su adhesión profesa al ideal europeo. En la cumbre sobre la ampliación de la UE celebrada en Luxemburgo en 1997, la candidatura turca quedó congelada, pero nunca se planteó retirar la solicitud. Por el contrario, la clase gobernante parecía satisfecha con el punto muerto por el cual Turquía sería considerada siempre un eterno solicitante de la adhesión y la UE un objeto de deseo veleidoso y en último término desinteresado. Este proeuropeísmo oficial convirtió el llamamiento a las normas democráticas necesarias para la candidatura a la UE en una forma de crítica legítima; la única disponible, de hecho, para aquellos que solicitaban mayores libertades civiles. Pedir un rápido cumplimiento de las condiciones impuestas por la UE era una opción mucho más segura que el enfrentamiento directo con los formidables poderes de la elite gobernante. Las encuestas de opinión pública indicaban que una sólida mayoría, entre el 65 y el 75 por 100, respaldaba esta amplia coalición de intereses; aun cuando esto no reflejara un conocimiento claro de lo que realmente supondría formar parte de la UE.

Lo inesperado en esta coyuntura fue el cambio de actitud de la UE. En diciembre de 1999, dos años después del rechazo de Luxemburgo, los jefes de Estado de la UE, reunidos en la cumbre de Helsinki, acordaron conceder a Turquía la condición de candidato. Los observadores han señalado diversos factores. En Alemania, Schroeder había sustituido en 1998 al más intransigente Kohl. El encarcelamiento de Öcalan y la rendición del PKK habían calmado la cuestión kurda. El gobierno de Blair había hecho una firme campaña a favor de la ampliación, que consideraba un antídoto contra la integración. Había un acercamiento nuevo a Grecia, en parte como

toria de las relaciones entre Turquía y la UE, véase Meltem MÜFTÜLER-BAC, *Turkey's relations with a changing Europe*, Manchester, 1997; Mehmet UGUR, «The Anchor-Credibility Problem in EU-Turkey Relations», en Jackie GOWER y John REDMOND (eds.), *Enlarging the European Union*, Aldershot, 2000; Birol YESILADA, «Turkey's Candidacy for EU Membership», *Middle East Journal*, vol. 56, núm. 1 (2002).

resultado de la «diplomacia del terremoto» de 1999. La TÜSIAD había presionado con éxito en Bruselas. El apoyo estadounidense —en especial, los esfuerzos de Clinton en la cumbre de la OSCE celebrada en Estambul en noviembre de 1999— se consideró también instrumental para garantizar el resultado positivo de Helsinki, aunque Bruselas se ha molestado por las frecuentes intervenciones estadounidenses a favor de Turquía, especialmente desde que comenzó la presidencia de G. W. Bush. Por supuesto, Turquía ha demostrado ser un activo leal en el periodo posterior a la Guerra Fría, y la entrada en la UE, se sostenía, ayudaría a estabilizar internamente al país y sin coste alguno para Estados Unidos y la «alianza occidental».

No obstante, la decisión tomada por la UE en 1999 de conceder la condición de candidato a Turquía tomó por sorpresa a parte de la elite estatal de Ankara. Habiendo contado con la posposición perpetua, ahora descubrían que las reformas que se les exigían suponían alterar significativamente su sistema de seguridad nacional y sus puntales ideológicos. El ideal de nación como comunidad tendría que ceder paso ante el imperio de la ley; la aplicación de las libertades civiles y políticas fortalecería a las fuerzas de oposición. Habría que reconocer los derechos culturales de la minoría kurda, y redefinir el laicismo para permitir la libertad de organización y de expresión religiosa. Quizá lo más controvertido era que el ejército tendría que abdicar de su regencia sobre el Estado. En consecuencia, la oposición al proyecto europeo, en especial por parte de los militares, pero también desde las filas de la burocracia y el poder judicial, se manifestó por primera vez abiertamente. Altos mandos militares opinaban que la UE, con el pretexto de los derechos culturales, quería dividir étnicamente a Turquía; el Partido de Acción Nacionalista, de extrema derecha y miembro de la coalición de Ecevit, se movilizó para defender la estructura nacional unitaria contra las exigencias europeas. Las fuerzas contrarias a la UE señalaron que la importancia geoestratégica de Turquía le permitía confiar siempre en la ayuda económica del FMI y el respaldo de Washington. Si bien la UE había sido inicialmente un proyecto estatal para la elite turca, ahora se había convertido en plataforma para aquellos que querían controlar el autoritarismo plutocrático de Ankara. Sin embargo, la incitación retórica del sector estatalista les resultó útil a los democratizadores. De hecho, muy pocas veces llegaron realmente a proponer una ruptura total con la UE. El discurso kemalista oficial no permitiría tal abandono del ideal occidental.

La inquietud del ejército y de sus extensiones en el gobierno civil acerca de las perspectivas de entrada en la UE alimentó las dudas por parte europea. El diálogo entre Turquía y la UE siempre ocultó más tensión de lo que las partes admitían abiertamente. Las elites europeas que aspiraban a una federación políticamente unida ponían objeciones a que Turquía se convirtiera en miembro de hecho con los mismos argumentos que De Gaulle se había opuesto a la entrada de Reino Unido en la década de los sesenta. Los democristianos austriacos y alemanes sostenían que Turquía no era suficientemente europea, o que era demasiado islámica, culturalmente

hablando. Las encuestas de opinión demostraban que sólo una minoría respaldaba la candidatura turca, aunque más elevada en el sur de Europa que en el norte. Giscard d'Estaing acusaba a otros políticos de hipocresía, declarando que aceptar a Turquía en la Unión significaría el fin de Europa¹². Pero también la UE estaba atrapada en su propia retórica de «unión de voluntarios»: aparentemente, todos aquellos que cumplieran los criterios de Copenhague podían unirse. Por consiguiente, era necesario permitir que las negociaciones avanzaran por los canales designados y el impulso burocrático tomó el relevo, con informes de progreso preparados anualmente por la Comisión.

El gobierno del AKP

Las fuerzas partidarias de la UE en Turquía recibieron un inesperado espaldarazo con la victoria electoral del AKP en noviembre de 2002. El partido no sólo había prometido de hecho trabajar en pro de la adhesión, sino que era la única fuerza política no comprometida por su relación con la elite estatal. Incluso antes de que se formara el gobierno, Erdoğan inició su mandato haciendo la consabida ronda de visitas a las capitales europeas para que le respaldaran en el establecimiento de un calendario de negociaciones para la adhesión de Turquía. Era la primera vez en quince años que en Ankara se formaba un gobierno de un solo partido, con un primer ministro que podía prometer aplicar reformas sin temer (u ocultar) el sabotaje de sus socios de coalición. En los pasados dieciocho meses, el gobierno del AKP ha trabajado febrilmente para acelerar la legislación empezada bajo el gobierno de Ecevit. La prerrogativas del Consejo Nacional de Seguridad se han reducido; se ampliará para incluir una mayoría de civiles, uno de los cuales será su presidente. En junio de 2004, liberaron por fin a los diputados kurdos encarcelados, y en la TRT, emisora controlada por el Estado, se emite un programa en kurdo, «Nuestras riquezas culturales». Quizá sigan otros derechos que avancen más en la satisfacción de las exigencias kurdas. Queda por ver si el proyecto de legislación para proteger a los individuos contra los órganos coercitivos del Estado tiene algún efecto sobre el comportamiento real de la policía y los tribunales. La tortura y la brutalidad policial son desde hace tiempo características básicas en las relaciones del Estado turco con la población, y los gobiernos civiles han carecido de valentía para llevar a los perpetradores ante la justicia. Las apelaciones de las víctimas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos proporcionaron las únicas excepciones durante la

¹² Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt fueron coautores de un artículo de opinión en el que desaprobaban la cumbre de Helsinki en la que se había acordado la candidatura turca. D'Estaing fue particularmente franco en noviembre de 2002, cuando declaró que Turquía no era un país europeo, ni por geografía ni por religión. Véase «L'Europe sans frontières», *Le Monde* (9 de noviembre de 2002). En general, la candidatura turca ha sido más popular entre la izquierda que entre la derecha (el Reino Unido es una excepción), y en los países del sur de Europa más que en los del norte.

pasada década, cuando el Estado turco ordenó indemnizar por daños y perjuicios a algunos de sus propios ciudadanos. El gobierno del AKP ha reiterado que las sentencias del TEDH sentarán jurisprudencia para los tribunales turcos.

Erdoğan encontró una respuesta fría sobre el calendario de acceso en la cumbre de la UE celebrada en Copenhague en diciembre de 2002, en el momento culminante de la turbulencia experimentada en las relaciones transatlánticas antes de la guerra de Iraq. La consideración del caso turco se pospuso hasta diciembre de 2004. Pero la insurgencia desatada el año pasado en Iraq, así como el confiado progreso del AKP, ha cambiado las prioridades. En mayo de 2004, el comisario de Asuntos Exteriores de la UE, Chris Patten, calificó el voto del Consejo Europeo en diciembre de 2004 como «la principal prueba sobre la adopción por parte de la Unión Europea de una actitud pluralista e incluyente hacia el islam». En junio, el Consejo anunció que estaba satisfecho con la democratización turca y que dejaría de controlar su avance. Salvo que se produzca algún trastorno grave, parece probable que en diciembre de 2004 Turquía sea admitida a la sala de espera de la UE, aun cuando tenga que seguir en ella durante un largo periodo mientras Bruselas maniobra para establecer suficientes exclusiones voluntarias, vías múltiples y lagunas jurídicas de subsidiariedad para diferenciar futuras subvenciones agropecuarias y restringir los movimientos de nuevos solicitantes de empleo.

Por supuesto, el comienzo de las negociaciones de acceso a la UE no resolverá mágicamente las tensiones engendradas por la vida política y social turca. Por el momento, el ejército parece resignado a aceptar la reducción de funciones que las hábiles maniobras de Erdoğan le han asignado, pero los llamamientos a que retome el manto de guardián vigilante no han desaparecido. El resultado de la lucha dependerá de que el AKP consiga negociar el consentimiento de su base islámica a un tipo de gobierno más centrista que también satisfaga al *establishment* laicista y a los militares. La función que desempeñe el ejército depende también probablemente de en qué medida se dedique a las nuevas guerras y a las empresas planeadas por el Pentágono. El veto del Parlamento al tránsito de las tropas estadounidenses por suelo turco hacia Iraq en marzo de 2003 —un tercio de los recién elegidos diputados del AKP desobedeció la disciplina de partido para votar con el opositor Partido Popular Republicano— parece improbable que se repita. El inaudito acto de desobediencia turco enfureció a la Casa Blanca, y desde entonces Erdoğan está haciendo todo lo posible por compensarlo. En octubre de 2003, había intentado vencer a las filas del AKP de que votaran a favor del envío de tropas para respaldar la ocupación liderada por Estados Unidos, usando la lógica militar de que era necesaria una presencia armada turca para evitar la formación de un Estado kurdo. Sólo las urgentes súplicas del Consejo de Gobierno iraquí evitaron que se produjera el despliegue. Los generales siguen siendo tan importantes como siempre para Washington, y el propio Erdoğan se ha comprometido a tranquilizar a Estados Unidos. No está

claro que el creciente perfil profesional del ejército pueda reconciliarse fácilmente con una disminución de su acostumbrada presencia en los asuntos políticos, especialmente si se produce un resurgimiento de la actividad guerrillera kurda dentro de las fronteras de Turquía.

En el ámbito presupuestario, la carga de la deuda sigue aumentando y aunque el AKP consiga reducir gradualmente los tipos de interés, la aritmética parece insostenible. Es improbable que el gobierno declare una quiebra abierta en un futuro próximo, pero, en cuanto se disipe la atmósfera de crisis perpetua, tendrá que enfrentarse al creciente resentimiento contra la austeridad y la escasez de las partidas presupuestarias dedicadas a gastos sociales. Aunque la recuperación económica ha sido sustancial desde la crisis de 2001, la joven y creciente población turca lanza cada año al mercado laboral un nuevo contingente de jóvenes trabajadores cuyas perspectivas, en una época de aumento del desempleo, son cada vez más decepcionantes. La reestructuración de la fuerza de trabajo ha creado en las grandes ciudades una visible polarización que ya no puede solucionarse con los mecanismos tradicionales de las grandes familias y la solidaridad vecinal. Durante la década de los noventa, en la emigración a las ciudades predominaron los kurdos que huían de la guerra o eran obligados a salir de las provincias del este y del sureste. Mientras los anteriores migrantes se veían atraídos por las oportunidades de empleo o por un mejor acceso a los servicios de enseñanza y sanitarios, es muy probable que la decisión de los recién llegados se debiera a la pura necesidad. Estos migrantes desplazados han terminado en Estambul, en suburbios de chabolas alrededor de Diyarbakir, Adana o Antalia, o en ciudades costeras de menor tamaño. La mayoría no tiene adonde volver.

Los nuevos pobres urbanos han proporcionado una enorme base electoral para el AKP, pero siguen siendo un factor impredecible. Por ahora, el AKP sigue beneficiándose de su historial relativamente limpio de corrupción. Su principal atractivo para los pobres urbanos no radica tanto en sus propuestas concretas como en su proyección de empatía; también se beneficia de la ausencia de un canal político alternativo para expresar el descontento. De los dos grandes partidos que reivindicaban un legado de «izquierda», el DSP de Ecevit se había convertido en nacionalista y estatalista antes de su desaparición en las elecciones de 2002. El Partido Popular Republicano, que ahora forma la oposición parlamentaria, con el 19 por 100 del voto popular, se caracteriza primordialmente por su «laicismo»; en consecuencia, sus votos proceden mayoritariamente de la clase media de las regiones más desarrolladas y las ciudades mayores. A medida que la desaparezca la novedad, el conflicto entre las políticas del AKP y las exigencias de su principal electorado, alentado por la retórica populista, estará cada vez más lleno de tensión. Aunque el reconocimiento formal por parte de la UE de que finalmente existe una perspectiva de adhesión proporcionará un claro estímulo, el futuro del «faro de la democracia en el mundo musulmán», como lo califica Washington, sigue siendo incierto.